

El Giro Narco Democrático de Colombia

Elecciones, cocaína y la captura del Estado

www.360geopolitica.org

En menos de cuatro meses, Colombia celebrará elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo) en medio de un entorno político profundamente *deteriorado*. Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, el país exhibe una forma paradójica de “éxito” a través de seis pilares de su administración—cada uno reflejando *degradación* institucional más que consolidación democrática.

1. Cocaína y poder del Estado. Colombia ha *consolidado* su posición como el mayor productor y exportador mundial de cocaína. Lejos de revertir décadas de narcotráfico, la administración Petro ha *supervisado* su expansión, integrándolo como un componente estructural del poder político—particularmente a través del marco de la Paz Total.

2. Violencia política e impunidad. La gestión de Petro frente a la violencia política ha fracturado al país. Líderes de oposición, periodistas, minorías, el sistema judicial y la sociedad civil operan bajo una *amenaza* persistente. Este clima quedó trágicamente confirmado con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay—una ilustración *contundente* de los peligros inherentes a la trayectoria actual de Colombia.

Otro elemento clave de la violencia política ha sido la existencia de ataques *sistemáticos* y organizados contra mujeres, razas, religiones, niños, países y toda persona que no comparta los postulados de Petro.

3. La corrupción como forma de gobierno. La corrupción se ha vuelto *emblemática* del gobierno. Los escándalos son rutinarios, no excepcionales, mientras que las detenciones e investigaciones de aliados cercanos rara vez conducen a la rendición de cuentas. La administración gobierna con una confianza visible en que las consecuencias ya no aplican.

4. Inestabilidad administrativa y simbolismo. El desorden administrativo se ha convertido en *doctrina*. Los ministros rotan aproximadamente cada seis meses; los funcionarios de nivel medio, cada tres. La memoria institucional, la continuidad y la rendición de cuentas han sido *erosionadas*. La gobernanza no está impulsada por la pericia ni la planificación, sino por la *improvisación* permanente.

Esta inestabilidad se ve agravada por nombramientos que priorizan el *simbolismo* político sobre la competencia. Las credenciales académicas se invocan de manera selectiva, mientras que mujeres y representantes de minorías son instrumentalizados en lugar de empoderados. En un país con profesionales

altamente capacitados, esta estrategia socava la capacidad del Estado, alimenta la polarización y debilita la confianza pública.

5. Petro, Cepeda y el alineamiento internacional. El presidente Petro y el senador Iván Cepeda han actuado como defensores *de facto* del régimen de Maduro. Ambos tratan a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, mantienen estrechos vínculos políticos y pasan extensos períodos en Caracas. La administración y el Pacto Histórico han realizado más de 900 visitas a Venezuela. Cepeda no ha revelado el alcance total ni la financiación de estos viajes.

Tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026, ambos regímenes se movilizaron internacionalmente en defensa de la dictadura. Cepeda viajó a España, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría recibido a la delegación, *facilitando* elementos de su agenda—sin transparencia pública sobre la financiación.

Mientras tanto, afirmaciones en ciertos medios españoles de que Venezuela controla su industria petrolera son demostrablemente falsas: durante casi dos décadas, el control efectivo ha estado en manos de potencias extranjeras, principalmente Irán, China y Rusia, mientras que los venezolanos han obtenido beneficios mínimos.

6. Revisionismo histórico en Colombia. Donantes internacionales y socios multilaterales han financiado iniciativas culturales y de memoria bajo la administración Petro que, aunque presentadas como reconciliación, a menudo rescatan a perpetradores de crímenes graves—incluidos secuestros y violencia armada—bajo una luz complaciente.

Relatos ficcionalizados de hechos reales corren el riesgo de desplazar la responsabilidad de los perpetradores hacia las víctimas, lo que subraya la necesidad de una supervisión más estricta para garantizar que el apoyo a la memoria histórica mantenga la precisión factual, un enfoque centrado en las víctimas y la rendición de cuentas.

Bajo Petro, el poder ilícito ingresó al Estado y permaneció. La Paz Total no desmovilizó la violencia; la institucionalizó convirtiendo el apalancamiento armado y criminal en *autoridad* política. La violencia política es ahora *sistémica*. El Ejecutivo emplea estigmatización, intimidación y amenazas contra opositores, periodistas, mujeres, minorías y la sociedad civil. La coerción no es incidental: *es método*.

El asesinato del senador Uribe Turbay es la prueba más clara. Tras un sostenido señalamiento público por parte del presidente, Uribe Turbay fue baleado en un mitin en

Bogotá el 7 de junio de 2025 y posteriormente falleció. Los investigadores rastrearon a los perpetradores hasta redes criminales organizadas, incluida la Segunda Marquetalia de Iván Márquez operando desde Venezuela. El crimen surgió de un entorno de incitación oficial e impunidad.

Esta arquitectura antecede a la presidencia de Petro. Durante la campaña de 2022, su hermano y un futuro comisionado de paz negociaron dentro de la cárcel La Picota con líderes de grupos criminales organizados, otorgando *legitimidad* a actores violentos.

El narcotráfico ya no solo penetra el Estado: lo organiza. Los esfuerzos de erradicación colapsaron, las economías criminales se expandieron y los grupos armados ilegales consolidaron el control territorial. La Paz Total formalizó este orden al reducir la presión militar y conferir reconocimiento político. El alineamiento de Colombia con la Venezuela de Maduro completa el sistema: Venezuela opera como santuario, centro logístico y escudo para redes criminales transnacionales integradas con grupos criminales colombianos.

El resultado es una narcodemocracia: elecciones *moldeadas* por pactos ilícitos, impunidad para aliados, soberanía criminal en regiones fronterizas y grupos armados alineados con la coalición gobernante ejerciendo poder. La disidencia no se debate: se neutraliza.

La administración Petro ha invertido millones de dólares en *alterar* las métricas utilizadas para monitorear la economía y el cultivo, producción y tráfico de cocaína. Indicadores que antes eran aceptados cuando Petro estaba en la oposición ahora son cuestionados, ya que sus resultados contradicen la narrativa oficial.

Petro acabo con Colombia. ¿Alternativas? A medida que Colombia se acerca a las elecciones de 2026, el país se *tambalea* bajo la sombra de la coerción y la impunidad. Los grupos criminales moldean cada vez más las dinámicas de poder local mediante la intimidación, mientras que figuras de la oposición enfrentan asesinato, exilio o silencio forzado. Los periodistas operan bajo amenaza constante. Los paralelos con el colapso de Venezuela ya no son hipotéticos: se desarrollan ante los ojos de la nación.

Dentro de la coalición gobernante, el senador Iván Cepeda es ampliamente considerado el principal favorito. Sin embargo, primero debe ganarse la confianza de Petro. Observadores señalan que cuenta con el respaldo del gobierno y de asociados de la Paz Total, así como con fondos cuyo origen plantea serias dudas legales, según informes de financiación de campañas. Pese a estas preocupaciones, el proceso

avanza, evidenciando un sistema político donde las reglas suelen aplicarse de manera selectiva y la influencia protege a quienes la detentan.

Otros aspirantes presidenciales—tanto dentro del entorno político de Petro como en la izquierda en general—siguen siendo fluidos y disputados. Figuras como Camilo Romero, Claudia López, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Roy Barreras [del entorno de Petro] se están posicionando activamente y participando en negociaciones internas para capturar espacio dentro de la banda de Petro.

Esta incertidumbre refleja la ausencia de un sucesor único y claramente designado por Petro y subraya la naturaleza fragmentada y disputada del liderazgo político de cara a las elecciones.

Desde el centro, Sergio Fajardo mantiene un apoyo estable en las encuestas recientes. Observadores y sus propias declaraciones a los medios sugieren que, pese a la evolución de la dinámica de campaña, conserva la capacidad de recalibrar su estrategia y redirigir su candidatura—manteniendo abiertas sus opciones en un panorama electoral cada vez más volátil.

En la derecha y el centroderecha, múltiples contendientes compiten por posicionarse de cara a las consultas interpartidistas del 8 de marzo (Gran Consulta por Colombia), que seleccionarán formalmente a los candidatos oficiales para la contienda presidencial. Estas consultas reducirán el campo a un candidato por bloque, pero el resultado sigue siendo incierto, reflejando una fragmentación más amplia y un reacomodo estratégico a lo largo del espectro político.

En esta etapa, el probable abanico de contendientes para las elecciones presidenciales de mayo de 2026 incluye al candidato de Petro, Sergio Fajardo, el ganador de la consulta del centroderecha y una o dos figuras adicionales del entorno más amplio de la izquierda de Petro, dependiendo de cómo evolucionen las negociaciones internas y las alianzas electorales en los próximos meses.

A medida que avanza la campaña, nuevas dinámicas están reconfigurando el terreno electoral. Encuestas recientes muestran que Iván Cepeda continúa emergiendo como una de las figuras líderes en intención de voto, a menudo compitiendo estrechamente con contendientes de derecha como Abelardo De la Espriella en escenarios *hipotéticos* de enfrentamiento directo, con Sergio Fajardo ubicándose generalmente en tercer lugar.

Estas tendencias subrayan una contienda altamente polarizada, donde los extremos de izquierda y derecha movilizan un fuerte apoyo de base mientras el centro lucha por abrirse paso. La fragmentación de los bloques

políticos–intensificada por divisiones persistentes dentro de la derecha tradicional y alianzas fluctuantes– sugiere que ningún candidato puede aún reclamar un mandato decisivo a medida que se acerca la primera vuelta.

En este contexto volátil, la “Gran Consulta por Colombia” del 8 de marzo y los procesos de nominación relacionados serán hitos críticos. No solo determinarán a los candidatos formales para la contienda presidencial de mayo de 2026, sino que también señalarán cuán profundas son las fracturas a lo largo del espectro político colombiano.

Si el centro logra cohesionarse en torno a una alternativa viable, o si la polarización entregará la delantera a los extremos, sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es que el futuro político de Colombia–y la

posibilidad de una transición pacífica y democrática– depende de cómo se desarrollen estas consultas, alianzas y esfuerzos de movilización electoral en los próximos meses.

La verdadera democracia requiere un terreno de juego equilibrado; sin embargo, la actual contienda legislativa y presidencial está definida por un *desequilibrio* masivo de poder. Al combinar la maquinaria fiscal del Estado con el amplio alcance de la agenda de la “Paz Total” y una financiación privada cuestionable, el Pacto Histórico ha asegurado una ventaja tan definitiva como antidemocrática. Sin una supervisión rigurosa, estas fuerzas inevitablemente distorsionarán el resultado electoral, silenciando la voluntad genuina del pueblo colombiano.

Bogotá, Colombia – 30 de enero de 2026.